

## **La revolución bolivariana: surgimiento y evolución**

Eduardo Garzón Espinosa

Universidad Complutense de Madrid, septiembre de 2012

eduardo.garzon.espinosa@gmail.com

### **RESUMEN**

No se puede entender la revolución bolivariana y su desarrollo sin atender a la historia reciente del país. Las propuestas bolivarianas nacen a partir de un desengaño político, de una desigualdad económica y de un descontento social que hunden sus raíces en la mitad del siglo XX. Por ello se realiza en este apartado un pequeño repaso histórico por esos años para situar en contexto la irrupción política de Hugo Chávez y los bolivarianos en Venezuela, para pasar posteriormente a analizar brevemente los principales pasos de su gobierno, desde 1999 hasta la actualidad. Esta época de gobierno se divide normalmente por los analistas en tres etapas bien diferenciadas que responden a determinados puntos de inflexión en la dinámica política venezolana.

### **ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS DESDE EL FINAL DE LA DICTADURA EN 1958 HASTA LA LLEGADA DE CHÁVEZ A LA PRESIDENCIA EN 1999**

Tras el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958, Venezuela comenzó un período político marcado por el pacto de gobernabilidad “Punto Fijo”. Este proyecto estuvo protagonizado por los dos principales partidos políticos del país, y se basó fundamentalmente en un sector petrolero en auge cuyos abundantes ingresos terminaban distribuyéndose entre la mayor parte de la población. Era un modelo político que excluía la participación de la población formando así un sistema consensuado entre las élites. A pesar de ello, fue ampliamente aceptado por la ciudadanía debido a que la riqueza petrolera permitía unas condiciones de vida aceptables para la mayoría de los venezolanos.

Puesto que el fin de la dictadura no conllevó ninguna revolución social que paliara de alguna forma la dispar e histórica concentración de la riqueza ni del poder en la sociedad, la creciente renta petrolera fue repartiéndose de forma muy desigual entre los sectores sociales del país. El sector social se convirtió en un área que absorbía recursos sin evaluar el impacto de sus maniobras, quedando centrado fundamentalmente en los intereses de las capas más pudientes. De esta forma, se permitió un profundo enriquecimiento de las capas altas y medias de la sociedad al mismo tiempo que se mejoraban las condiciones de vida de la mayor parte de la población más pobre. Este modelo caracterizado por principios socialdemócratas se pudo mantener a lo largo del tiempo en un clima social relativamente estable y libre de conflictos. El reparto notablemente desigual de la principal riqueza del país se toleraba porque la tarta era cada vez más grande y la mayoría de la población podía salir ganando aunque fuese en proporciones diferentes.

Sin embargo la dinámica estable del modelo se vio afectada por el cambio en la evolución económica del país. Las últimas dos décadas del siglo XX estuvieron marcadas por un desgaste económico continuado que repercutió negativamente en las condiciones económicas del país, y muy especialmente en la renta petrolera. El ingreso petrolero disminuyó debido a la caída de los precios del crudo. Además, el Estado tuvo que hacer frente a una mayor demanda causada por el vertiginoso aumento de la población y también a unos pagos financieros crecientes en concepto de deuda pública. La crisis fue duradera e hizo mella en la moral de un país que se veía a sí mismo próspero y con grandes expectativas de futuro. El ingreso per cápita en Venezuela en el año 1998 fue de un 34,8% menor que en el año 1970 (Heston et al., 2002), lo cual supuso un descenso económico extraordinario durante ese lapso de tiempo.

Estas dificultades dejaron al descubierto un ineficiente y débil sistema distributivo que no pudo funcionar correctamente sin el motor económico. La estructura de prestaciones sociales no gozaba de un buen apuntalamiento y enseguida los ciudadanos más desfavorecidos empezaron a sentir el cambio. Aquella débil aunque continuada mejora de las condiciones de vida de la población no sólo llegó a su fin, sino que revirtió fuertemente su tendencia. El empobrecimiento de amplias capas de la población venezolana se potenció durante los últimos veinte años del siglo. Numerosas ciudades empezaron a gestar un cinturón de pobreza preocupante en sus alrededores que incluía a

ciudadanos que unos años antes habían vivido más que dignamente. Para 1997 Venezuela era uno de los países con más desigualdad del mundo, tal y como refleja el coeficiente Gini de ese año al superar al de Sudáfrica (62,3) y Brasil (61,8) (Rodríguez, 2000:1, 6).

Este drástico empeoramiento de los niveles de vida de la mayor parte de la población desencadenó una serie de conflictos sociales desconocidos en la historia reciente del país. El descontento social llegó a su máximo esplendor en febrero de 1989, durante el episodio conocido como El Caracazo. Las medidas neoliberales de ajuste estructural dictadas por el Fondo Monetario Internacional y que puso en marcha el gobierno de Andrés Pérez tuvieron un impacto muy doloroso en la ciudadanía, lo que provocó importantes saqueos en las principales ciudades del país. La reacción del gobierno venezolano fue brutal: estableció un toque de queda y ordenó una despiadada represión policial que acabó con la vida de 276 personas según las cifras oficiales; aunque determinados corresponsales extranjeros manejan una cifra de entre dos y tres mil fallecidos (CIDH, 1999; PROVEA, 1990). Este deplorable acontecimiento minó aún más la dañada reputación de un modelo político bipartidista que años atrás había sido tan elogiado por numerosos agentes internacionales como ejemplo de democracia. El débil rechazo popular a los dos intentos de golpe de Estado de 1992 fue la señal que probaba el desprestigio que sufría el sistema político del Punto Fijo. Los temas de corrupción que afectaron al presidente Andrés Pérez terminaron por poner el punto final al proyecto.

Sin embargo el siguiente partido político en llegar al poder –liderado por Rafael Caldera en un contexto de ruptura con el Pacto del Punto Fijo– tampoco se alejó del rumbo neoliberal que marcaba el Fondo Monetario Internacional sino que, tras unos años de indecisión, terminó por darle continuidad a pesar de las promesas electorales. Las políticas que se adoptaron tuvieron consecuencias aún más desastrosas: produjeron una violenta reducción del monto de las prestaciones sociales de los trabajadores, y por ende, un notable deterioro de las condiciones de vida de la población. Aquella vuelta de tuerca neoliberal puso de relieve definitivamente la crudeza de un sistema político y económico que había podido legitimarse gracias a una expansiva renta petrolera. Con la llegada de los inconvenientes económicos el régimen se mostró desnudo desvelando el carácter de élite que marginaba las demandas de la mayoría de la ciudadanía y la

limitada soberanía nacional condicionada por las exigencias de determinados organismos financieros internacionales.

El rechazo popular a las medidas económicas neoliberales se puso de manifiesto con las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Hugo Chávez Frías, apoyado por los hambrientos y marginados, clases medias concienciadas y luchadores sociales, obtuvo una contundente victoria con el 56,2% de los votos al enarbolar un proyecto político cuyas aspiraciones programáticas reflejaban precisamente las demandas de la población afectada por las medidas de ajuste estructural instadas desde el exterior. El movimiento social liderado por Chávez recogía un contenido impreciso y cauteloso, marcado por un discurso interclasista en lo social, nacionalista como factor unificador, anti-neoliberal en sus principios, y demandante de mayor soberanía popular y mayor autonomía nacional.

### **PRIMERA ETAPA DE GOBIERNO: FEBRERO 1999-NOVIEMBRE 2001**

Nada más tomar posesión de su cargo en febrero de 1999, Hugo Chávez firmó el Decreto n.3 consultando al pueblo sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. A pesar de los enormes obstáculos desplegados por la élite política del *puntofijismo*, que seguía dominando los organismos institucionales, finalmente el 25 de abril de 1999 tuvo lugar el referéndum sobre la conveniencia o no de convocar a la constituyente. El 92% de los votantes respondieron afirmativamente. Comenzó así a configurarse un proceso constituyente que fue modelo de democracia y participación, durante el cual todos los venezolanos fueron escuchados y donde se sacaron a discusión temas de interés general poco tratados por los políticos convencionales. Como resultado, la Constitución fue aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 con un rotundo “sí” que reunió el 71,78% de los votos.

La Constitución de 1999 (CRBV) debía ser el núcleo central del nuevo proyecto político e institucional que permitiera abrir los espacios de participación ciudadana y recuperar el control estatal de los recursos energéticos del país. En ella se reconocen los derechos individuales de los ciudadanos y en especial el de propiedad, y las formas democráticas en cuanto a participación de la sociedad. Al mismo tiempo, la Constitución se centra en el trabajo como núcleo primordial de la sociedad venezolana y garantiza la justicia social de todos los ciudadanos.

Respecto al histórico rentismo petrolero la Constitución proyecta su sustitución a través del surgimiento de un modelo productivo competitivo y una inclusión internacional adecuada con el objetivo de lograr un crecimiento económico duradero, verdadera meta económica en esta primera etapa. Este proyecto sitúa en el centro de la economía la propiedad privada a cambio de una política social progresista que supere los conflictos sociales. De esta forma, la economía venezolana queda diseñada como una economía mixta que combina fundamentos liberales con otros de intervención estatal.

La Constitución, además, renueva el discurso federalista y descentralizador, reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, fortalece el papel de la rama judicial dentro de la arquitectura constitucional, amplía en su alcance algunos derechos sociales contemplados en la Constitución anterior y reconoce otros nuevos con el objetivo de garantizar la inclusión de todos los sectores de la población, e incorpora el proyecto político de la integración política y económica de toda América Latina.

#### **SEGUNDA ETAPA DE GOBIERNO: NOVIEMBRE 2001-DICIEMBRE 2004**

El nuevo programa político bolivariano puso encima de la mesa un cambio notable en la dinámica política, económica y social del país, pero se trató en todo caso de un cambio moderado y en absoluto de un proceso transformador. A pesar de ello, se encontró con la plena oposición de un grupo conformado por la antigua oligarquía venezolana y las capas medias urbanas interesadas en un proyecto económico internacional. La confrontación política fue aumentando paulatinamente hasta delimitar una polarización bastante clara en la sociedad: de un lado partían los opositores al nuevo gobierno, y de otro, un bloque bolivariano de contenido nacional-popular.

La tensión social explotó finalmente con la aprobación de las Leyes Habilitantes en noviembre de 2001, las cuales perseguían trasladar los principios teóricos del nuevo proyecto a la práctica económica. El profundo conflicto social se plasmó en una serie continuada de paros empresariales que perjudicaron la economía del país y que desembocaron en el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Incluso después del fallido intento golpista los paros no sólo no terminaron sino que se recrudecieron hasta provocar una pérdida para el país de 7.367,18 millones de dólares (Lander, 2004:20),

una cantidad que suponía el 7,59% del PIB nacional (BCV, 2009). Esta guerra de clases abierta se saldó con el debilitamiento de la oposición al perder el apoyo social de buena parte de los trabajadores y del pequeño empresariado arruinado por los conflictos. Como resultado, la oposición sufrió una grave derrota en el referéndum revocatorio de 2004, y perdió el poder que necesitaba para frenar el proyecto bolivariano, que se vio fortalecido en buena medida marcando el inicio de una nueva etapa más ambiciosa en materia social.

Sin embargo, durante esta segunda época ya vieron la luz varas iniciativas atrevidas. Entre ellas destacaban la instauración de las misiones sociales, el fomento de un sindicalismo bolivariano (el Frente Bolivariano de Trabajadores), y el primer plan estructurado de actuación del gobierno (el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007). Este último supuso un avance frente a los anteriores planes al declararse “en transición hacia la Revolución bolivariana”. Perseguía el equilibrio social “no a partir de acciones benéficas y asistenciales”, sino a partir de principios como “la universalidad, la equidad, la participación y la corresponsabilidad con base a la garantía de todos los derechos”. El objetivo último es mejorar el desarrollo humano mediante unas mayores oportunidades de educación, salud, empleo, ingresos, organización social y seguridad ciudadana. Para lograrlo, el Plan proponía potenciar la remodelación del sector petrolero en busca de una mayor industrialización y así mejorar la distribución de la renta y crear un mercado interno considerable.

### **TERCERA ETAPA DE GOBIERNO: DICIEMBRE 2004-ACTUALIDAD**

Frente a una resistencia débil por parte de un desprestigiado bloque opositor, el gobierno bolivariano se vio con las manos libres para dar un nuevo y enérgico rumbo a su proyecto. Pese al grave perjuicio económico causado por la confrontación social anterior, la economía venezolana se recuperó a un ritmo acelerado en parte gracias a la recuperación de los precios del petróleo de los años 2005 a 2007 (PDVSA, 2007) y la adecuada gestión de la misma, lo que propició un clima amable para estas experiencias. Esta nueva orientación se denominó “Socialismo del siglo XXI”, y quedó caracterizada por el reemplazo progresivo de un Estado centrado en el capital por un Estado centrado en el trabajo.

La punta de lanza de este programa fue el Proyecto Nacional Simón Bolívar o Primer Plan socialista (PPS) de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el sexenio 2007-2013. La principal característica del Plan consiste en focalizar la atención no en el atraso tecnológico y productivo o en su débil estructura económica –como se hacía en los años anteriores–, sino en la contradicción capital-trabajo existente en todas las esferas de la economía. De esta forma la actividad económica ha de orientarse hacia una planificación, producción y distribución de tipo socialista, lo que no quiere decir que la propiedad pública y privada capitalista dejen de existir.

Otro factor novedoso del Plan es la potenciación de sectores económicos diferentes al petrolero, como la industria no energética, la manufactura, el transporte y los servicios básicos. Este desarrollo debe dirigirse conjuntamente por los productores y por el poder popular, plasmándose así un modelo de planificación no estatista.

No obstante, esta nueva faceta del movimiento revolucionario sufrió un notable golpe el 2 de diciembre de 2007. Aquel día la ciudadanía venezolana rechazó en las urnas –por estrecho margen– la aprobación de la reforma constitucional que iba a constituir el marco legal del novedoso proyecto bolivariano. Este evento fue seguido por otra derrota electoral en los principales núcleos urbanos de las últimas elecciones municipales y regionales de noviembre de 2008, lo que evidenció las primeras fracturas entre el proyecto bolivariano y su base social.

La falta de un marco legal sobre el que asentar el proyecto, unido a las consecuencias negativas de la crisis económica internacional, dificultan la plena cristalización del programa socialista. Hasta la fecha este impedimento de carácter legal se ha suplido con una lectura extensiva del concepto “economía social”, aprovechando los espacios en los que la Constitución permite a los poderes estatales intervenir en la planificación económica. En este contexto, destaca el proceso de nacionalización de empresas de los sectores bancario, alimentario, petrolero, comercial e industrial.

## BIBLIOGRAFÍA

BCV, Informe Económico, Banco Central de Venezuela, Caracas.

BCV, Información estadística, Banco Central de Venezuela, Caracas, <http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp>, 2009.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, (1999): Informe anual 1999, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Venezuela11298.htm>

GONZÁLEZ, L. y LACRUZ, T. (2007): *Política social en Venezuela*, disponible en [http://biblioteca2.ucab.edu.ve/iies/bases/iies/texto/GONZALES\\_Y\\_LACRUZ\\_2007.PDF](http://biblioteca2.ucab.edu.ve/iies/bases/iies/texto/GONZALES_Y_LACRUZ_2007.PDF)

HESTON, A., SUMMERS, R., y ATEN, B. (2002): *Penn World Tables Version 6.1*. Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania

LANDER, E. (2004): *Venezuela: proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas internacionales*, OSAL, Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires

LANDER, E. y NAVARRETE, P. (2007): “*La política económica de la izquierda latinoamericana en el gobierno DE Venezuela*”, Editorial Drukkerij Raddraaier B. V. Amsterdam. Disponible en: <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/venezuelaeconomicpolicy-s.pdf>

MATEO, J. P. y SÁNCHEZ, E. (2010): Política económica en Venezuela: propósitos, medidas y resultados obtenidos en la última década, disponible en [http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/27/79/PDF/AT20\\_Mateo-Sanchez.pdf](http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/27/79/PDF/AT20_Mateo-Sanchez.pdf)

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Petróleos de Venezuela y sus filiales. Caracas: Publicaciones PDVSA, 2007.

PROVEA, Informe anual, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Caracas, varios años, <http://www.derechos.org.ve/>

RODRÍGUEZ, C. F., (2000): *Factor Shares and Resource Booms: Accounting for the Evolution of Venezuelan Inequality*, en “World Institute for Development Economics Research”. Disponible en: <http://www.wider.unu.edu/publications/wp205.pdf>,

VICIANO, P. y MARTÍNEZ, R. (2001): *Cambio Político y Proceso Constituyente en Venezuela (1998- 2000)*, Melvin, España.